



**SENTENCIA**

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| <b>PROCESO</b>    | Ordinario laboral                   |
| <b>DEMANDANTE</b> | Juan Gabriel Arcos Henao            |
| <b>DEMANDADO</b>  | Colpensiones y Porvenir S.A.        |
| <b>RADICADO</b>   | 05-001-31-05- <b>012-2018-00612</b> |
| <b>TEMA</b>       | Ineficacia de traslado              |
| <b>DECISIÓN</b>   | Adiciona y confirma sentencia       |

El veintinueve (29) de junio de dos mil veintiuno (2021), el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, integrada por los magistrados **HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ, CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA** y **GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**, quien actúa como ponente, previa deliberación del asunto, según consta en el ACTA **199** de discusión de proyectos, procede a dictar sentencia de segunda instancia dentro del proceso ordinario promovido por **JUAN GABRIEL ARCOS HENAO** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES-** y la sociedad **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍA PORVENIR S.A.**, con radicado **05-001-31-05-012-2018-00612**.

• **PRETENSIONES**

El demandante pretende se declare la ineficacia del traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad efectuado a **PORVENIR S.A.** Como consecuencia, se condene al fondo privado a trasladar a **COLPENSIONES** todos los valores que hubiere recibido, como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, como los rendimientos que hubiera causado, y que se ordene al fondo público recibir todos estos conceptos y autorizar el regreso automático. Y se condene a las costas procesales a las demandadas.

• **HECHOS**

Como fundamento de las pretensiones indicó que nació el 31 de octubre de 1957. Que su afiliación inicial al ISS fue a partir del 18 de mayo de 1989. Que se trasladó a PORVENIR S.A. en el mes de febrero del año 2000. Que no se le suministró toda la información necesaria por el cambio de régimen, sino con la manifestación de que el ISS se iba a acabar. Que solicitó el regreso a COLPENSIONES, el cual fue negado, y, asimismo, solicitó el traslado a PORVENIR S.A. siendo también negado. Y que solicitó una proyección de su mesada pensional al fondo privado, señalándole que sería de \$992.700.

- **CONTESTACIONES:**

- ✓ COLPENSIONES:

Frente a los hechos de la demanda manifiesta que son ciertos los hechos con respecto a la edad, la afiliación a Colpensiones y la solicitud elevada, pero no le constan los demás hechos que tiene que ver con la afiliación al fondo privado. Se opuso a las pretensiones, y presenta como excepciones la de inexistencia de la ineficacia en el traslado de régimen, devolución de aportes debidamente indexados, buena fe, prescripción, compensación e imposibilidad de condene en costas.

- ✓ PORVENIR S.A.:

La accionada dio respuesta a la demanda señalando que no le consta la fecha de nacimiento ni la afiliación a COLPENSIONES. Que es cierto el traslado, el cual realizó 6 años después de entrada en vigencia de la ley 100 de 1993. Que si se le puso de presente todos los pormenores para poder acceder a su pensión y que dependería de él. Que en el año 2006, el demandante también se afilió a pensiones voluntarias, lo que evidencia que sabía del funcionamiento para pensionarse en el RAIS. Y que no le consta que haya elevado solicitudes a dicha entidad o a Colpensiones. Se opuso a las pretensiones y elevó varias excepción de mérito.

- **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:**

El 13 de marzo de 2020, el Juzgado Decimosegundo Laboral del Circuito de Medellín, **DECLARÓ** la ineficacia del traslado efectuado por el demandante a

PORVENIR S.A., entendiendo para efectos pensionales que siempre estuvo afiliado a COLPENSIONES, debiendo éste fondo público aceptar su regreso.

Como argumento de su decisión, expuso que PORVENIR S.A tenía la obligación desde la fase precontractual de proporcionar a su interesada una información completa y comprensible, teniendo en cuenta la relación que existe entre el administrador que es experto y el afiliado, que por regla general desconoce materias como las pensionales que son de alta complejidad. Que incluso en la asesoría puede a desanimar al asegurado ante la falta de conveniencia del traslado de régimen, de manera que, se debe llegar a proporcionar un buen consejo al brindar la asesoría primigenia. Que era el fondo privado quien tenía la carga de probar su diligencia y cuidado al momento de brindar la información veraz, completa, suficiente y oportuna sobre las implicaciones que le acarrearía el traslado de régimen en el caso en particular, de manera clara, detallada y documentada, señalándole cuáles eran las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Y que la administradora no aportó prueba del cumplimiento de dicha obligación o con el deber de información y del buen consejo. Por lo tanto, el acto de afiliación no produjo efectos.

En consecuencia, **ORDENÓ** a PORVENIR S.A a trasladar todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación del demandante, y que están depositados en la cuenta individual, con los respectivos rendimientos más los gastos de administración y comisiones con cargo a sus propios utilidades, debiendo COLPENSIONES recibir los mismos y reflejarlos en la historia laboral.

Y, **CONDENÓ** en costas procesales a PORVENIR S.A.

- **APELACIÓN:**

- ✓ PORVENIR S.A.:

En su recurso de apelación manifestó que se debe revocar la decisión en cuento a la declaratoria de ineficacia y sus consecuencias, toda vez que la información suministrada fue acorde a las disposiciones para la época y las que ha impartido la super intendencia financiera de Colombia. Que a la fecha de traslado del actor, los fondos no tenía la obligación de brindar la información

como hoy le es exigido a las AFPS. Que solo hasta el año 2014, se crea la doble asesoría, la cual no se le aplicaba al actor. Que si bien el cato de traslado impone un deber de información suficiente de parte de las administradoras esto no exonera al afiliado del deber de estar suficientemente ilustrado a la hora de escoger su régimen pensional. Que el demandante no ejercicio su derecho al traslado cuando se encontraba posibilitado para ello, lo cual ya no es posible. Que no se puede declarar el traslado si las condiciones para ello solo es el valor de la mesada pensional. Que no se pueden trasladar las cuotas de administración, toda vez que la ley 100 de 1993, en su artículo 20, dispone que estas se generan tanto en el RAIS como en el RPM, siendo ejecutada correctamente la administración de los dineros por parte del fondo privado y generando unos rendimientos; y que estos descuentos son deducidos por manato de la ley. Que este pago de cuotas de administración, también compone el pago de unos seguros a unas administradoras, las cuales no están vinculadas al proceso, y por ende, no se puede realizar dicho recobro. Que en el proceso no se evidencio que existieron un detrimento para realizarse las restituciones mutuas. Y que si lo rendimientos financieros generados por la excelente administración del fondo son mayores, no habría razón para reintegrar dinero alguno, toda vez que se podría dar la compensación.

✓ COLPENSIONES:

La apoderada de COLPENSIONES, en síntesis, indico que conforme a lo señalado por la Corte Suprema de Justicia, se debe devolver todos los rubros de manera indexada, por ser una entidad pública y para garantizarse el principio de la sostenibilidad financiera del sistema.

De igual forma, la presente sentencia será revisada en **GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA** con ocasión de las condenas impuestas a Colpensiones.

• **ALEGATOS:**

✓ COLPENSIONES:

Una vez transcurrido el término de traslado, Colpensiones en sus alegatos, señaló en síntesis que es improcedente autorizar el traslado del accionante, toda vez que éste a través del formulario de vinculación de manera libre,

espontánea y sin presiones, quiso trasladarse. Que no es razonable ni jurídicamente válido imponer a las administradoras obligaciones y soportes de información no previstos en el ordenamiento jurídico vigente al momento del traslado de régimen. Que no es admisible que el documento soporte de la afiliación que es el formulario suscrito por el afiliado, sea desestimado por los diferentes Despachos como una prueba a la voluntad libre de afiliación del demandante. Que la regla general es que corresponde a cada parte probar el supuesto de hecho que exhibe y atendiendo las situaciones particulares del caso, el juez puede invertir la carga de la prueba exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias. Que dentro del proceso la parte demandante no aporta ninguna prueba en la que se demuestre fehacientemente los supuestos de hecho que alega, y pretende que bajo la figura de la carga dinámica de prueba se exima de probar mínimamente lo alegado en el libelo demandatorio. Que no se probó que el traslado al Régimen de Ahorro Individual haya sido por falta de información al demandante, pues como quedo establecido en la declaración rendida por este se evidencia con el interrogatorio de parte que el asesor del fondo privado le suministro la información que le permitió suscribir el formulario de afiliación. Que de conformidad con el literal e) del artículo 13 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo segundo de la ley 797 de 2003, es improcedente autorizar el traslado del accionante. Y que si ha de confirmarse la sentencia, solicita se traslade la devolución de la totalidad de las sumas que se encuentre depositados en la cuenta de ahorro individual, los rendimientos que se hubieren generado, los descuentos efectuados por garantía de pensión mínima, cuotas para el cubrimiento de los seguros previsionales, primas de reaseguros de Fogafín, de manera indexados; así como las sumas de dinero percibidas por concepto de gastos de administración con todos sus frutos e intereses por el tiempo que el demandante permaneció afiliado al RAIS.

✓ PORVENIR S.A.:

Manifestó en sus alegatos que no se debe declara la ineficacia, toda vez que no se probaron ninguno de los presupuestos establecidos en la ley para declarar la nulidad absoluta, como tampoco, la ineficacia del acto jurídico por el argumento jurisprudencial de la falta del consentimiento informado, ya que el fondo privado cumplió con la carga probatoria de acreditar que suministró la información suficiente y objetiva al momento de la vinculación como lo refleja el formulario de afiliación, el cual se reitera se trata de un documento público

que se presume auténtico, además que no fue tachado ni desconocido en los términos previstos en la ley. Que no se acreditó la existencia de algún vicio del consentimiento con el cambio de régimen. Y que en caso de confirmarse la sentencia, no se debe ordenar la devolución de sumas diferentes a las indicadas en el literal b) del artículo 113 de la Ley 100 de 1993, pues se configuraría un enriquecimiento sin causa a favor de un tercero dentro del negocio jurídico celebrado entre la parte demandante y PORVENIR S.A.

- **DECRETO 806 DE 2020:**

Atendiendo a lo establecido en el Decreto 806 del 4 de junio de 2020 “*Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica*”, artículo 15, la sentencia se profiere escrita.

### **CONSIDERACIONES**

Los problemas jurídicos a resolver de conformidad con los recursos interpuestos y en grado jurisdiccional de consulta en favor de COLPENSIONES, será *i)* determinar si el acto jurídico de afiliación del señor UAN GABRIEL ARCOS HENAO a PORVENIR S.A., fue válido, o si por el contrario es ineficaz; *ii)* consecuentemente si procede la declaratoria de la ineficacia, se deberá analizar los conceptos a devolver por el fondo privado; *iii)* y la operancia o no de la excepción de prescripción de la acción.

***i. Acto jurídico de la afiliación y precedente jurisprudencial en materia de traslado de régimen pensional:***

Para comenzar, esta Sala pasará hacer un recuento breve de la jurisprudencia de esa alta Corporación de Justicia, que estructura el tema.

Advierte la Corte que el traslado de régimen debe estar precedido de toda información relevante para la toma de la decisión. Que es necesario que el fondo de pensiones proporcione a quien pretenda captar como su afiliado, una información suficiente, completa y clara sobre las reales implicaciones que le

conllevaría dejar el anterior régimen y sus posibles consecuencias futuras. Que la figura de la ineficacia es una consecuencia prevista en el literal b del artículo 13 de la ley 100 de 1993 para aquellos casos en que el fondo de pensiones omitió suministrar información que permitiera la selección de régimen de forma libre y voluntaria, acto indebido de esta, que tiene como consecuencia no producir sus efectos propios. Que el estatuto Financiero de la época en los artículos 97 y siguientes consagró que las administradoras debían obrar no solo conforme a la ley, sino soportadas en los principios que orientan la buena fe en las que se sancionaba la falta de información relevante.

Más adelante la Corte Suprema de Justicia precisó que son deberes de las administradoras de pensiones, lo siguientes:

- (i) Brindar información en todas las etapas del proceso de afiliación, desde la antesala hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional.
- (ii) La información debe ser completa y comprensible. Y,
- (iii) La información debe proporcionarse con prudencia, teniendo obligación de buen consejo, que puede llevar incluso a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.

Si bien los precedentes judiciales tenidos en cuenta por esta Sala corresponden a afiliados beneficiarios del régimen de transición, las razones que sustentan la ineficacia del traslado no tienen en cuenta esa circunstancia, pues el hecho determinante es la falta de información al afiliado.

Así las cosas, lo dicho anteriormente constituye sustento que permite deducir las siguientes reglas:

- (i) Las administradoras de pensiones tienen a su cargo la obligación de información de conformidad con lo establecido en el literal b del artículo 13 de la Ley 100 de 1993.
- (ii) La información del traslado de régimen debe ser de transparencia máxima, detallada y documentada acerca de la

incidencia que pueda tener frente a sus derechos prestacionales, de modo que no basta con explicar solo los beneficios que dispense el régimen al que pretende trasladarse, sino además el monto de la pensión que en cada uno de ellos proyecte la diferencia en el pago de los aportes que allí se realizarían, las implicaciones y la conveniencia o no de la eventual decisión y obviamente la declaración de aceptación de esa situación. Y,

- (iii) La carga de la prueba de demostrar que se informó de forma detallada, clara y documentada recae en la administradora de fondos de pensiones.

De igual forma, la Corte Suprema de Justicia fijó unos grados de exigencia de la información, dependiendo de las normas vigentes para la fecha en que se efectúe el vínculo a las administradoras de pensiones, estableciendo en lo temporal los siguientes momentos:

- (i) Desde la fundación de las AFP.
- (ii) Desde la expedición de la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 2241 de 2010 incorporado en el Decreto 2555 de 2010.
- (iii) Y, a partir de la vigencia de la Ley 1748 de 2014, Decreto 2071 de 2015. y en la circular 16 de 2016, la cual entrega instrucciones generales para la remisión de información financiera para efectos de inspección, vigilancia y control.

La determinación a tomar, tiene como soporte en la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia en las sentencias 31314 y 31989 de 2008; 33083 de 2011; 12136 y 46292 de 2014; SL9519 de 2015; 47125, SL19447 y SL17595 de 2017; SL3496 y SL4989 de 2018; SL1421, SL1452, SL1688, SL4360 y SL4426 de 2019; STL 3716, STL4001, STL4084, SL2877, SL4811 de 2020, y SL1217, SL782 de 2021.

En el caso objeto de estudio, sobre los pormenores que rodearon la afiliación del actor, del interrogatorio de parte se desprende que cuando estaba en el centro de salud Alfonso López, a principios del año 2000, entró una señorita



que laboraba para PORVENIR S.A., y en el transcurso de 10 a 15 minutos, le informó que era mejor que se cambiara de régimen de pensión, ya que el Seguro Social iba a desaparecer y la pensión se iba a perder, y que en fondo privado su pensión sería mayor y podría pensionarse más rápido. Que la asesora llevó un formulario ya preinscrito y le dijo donde firmara. Que no recuerda haber leído el documento para su traslado. Que si conoce la ley 100 de 1993, pero la parte de salud. Que no recuerda que le hayan explicado la garantía de pensión mínima, o en qué consistía los rendimientos. Que nunca lo coaccionaron para firmar el formulario de traslado. Que si ha recibido algunos informes del fondo de Cesantía más que todo, pero no tanto de pensiones. Que si fue a PORVENIR S.A. para que le hicieran una proyección, en donde le dijeron que tendría una mesada de \$800.000 y a las 62 años, de un millón. Y que la motivación de regresar al RPM es que se siente frustrado de solo recibir un salario mínimo.

En lo que respecta a la carga de la prueba, es importante hacer la remisión a la sentencia SL4426-2019, donde la Corte expone los motivos por los cuales las administradoras deben demostrar que suministraron una información clara y transparente, lo que se explica desde la premisa que el afiliado presenta una afirmación indeterminada *-la de que no recibió información-* y es el fondo a quien corresponde demostrar que cumplió con sus deberes en esa materia, aspecto en el que por demás está en una mejor posición de ilustrar por cuanto debe conservar en sus archivos la documentación que soporta el traslado. Así mismo, contrastando toda la jurisprudencia citada, debe decirse que la carga de la prueba recae en la administradora, puesto que, como entidad especializada, cuenta con los conocimientos para que a través de sus asesores hagan conocer a los afiliados que pretende captar los pormenores de sus situaciones pensionales y las consecuencias que trae elegir el Régimen al que le proponen afiliarse.

Se tiene que las afirmaciones realizadas por el demandante no fueron desvirtuadas procesalmente por PORVENIR S.A., toda vez, que pese a que la entidad administradora anexó el documento visible de folio 62 del expediente, esto es, el formulario de afiliación, mismo que fue suscrito por el actor, permite pensar en un principio que si existió una asesoría acerca de cuáles serían los efectos positivos o adversos de trasladarse de un régimen pensional a otro, lo cierto es que este documento no es prueba suficiente para determinar que efectivamente al accionante se le haya brindado una completa asesoría,

acerca de cuáles serían los efectos positivos o adversos de trasladarse de un régimen pensional a otro.

Debe repetirse que la labor de los asesores de los fondos privados, en la etapa pre-negocial, anterior a la materialización del consentimiento, consistía en brindar una información transparente, completa, detallada y comprensible, puesto que, lo que se revisa es si la administradora de fondos de pensiones que pretendía captar al demandante como su afiliado cumplió con los imperativos profesionales de información.

Vale la pena manifestar que, por el hecho de que el demandante firmara el formulario de vinculación, donde se hace constar que la escogencia del régimen de ahorro individual se efectúa de forma “libre, espontánea y sin presiones”, no implica que el actor conociera las consecuencias que implicaba el cambio de régimen pensional.

También es importante advertir, que, si bien la mayoría de los precedentes judiciales tenidos en cuenta por esta Sala corresponden a afiliados beneficiarios del régimen de transición, las razones que sustentan la ineficacia del traslado no tienen en cuenta esta circunstancia, pues el hecho determinante es la falta de información al afiliado.

No puede pasar por alto esta Sala que la ineficacia es una respuesta jurídica a la transgresión de un deber legal y ello implica, que el acto jurídico declarado ineficaz carezca de vida jurídica, y, por tanto, no produzca ningún efecto, por tal razón no es procedente analizar el caso de autos bajo lo dispuesto en el artículo 2 de la ley 797 de 2003, el cual modificó el literal e del artículo 13 de la ley 100 de 1993, en lo que tiene que ver con el traslado de régimen cuando al afiliado le faltaren 10 años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez.

Con respecto a la información que se le debía brindar al demandante para la fecha de traslado, en las providencias SL1688-2019, SL4360-2019 y SL4426-2019, el Alto Tribunal fijó unos grados de exigencia de la información, dependiendo de las normas vigentes para la fecha en que se efectúe el vínculo, estableciendo en lo temporal los siguientes momentos: primer periodo, desde la fundación de las AFP; segundo momento, desde la expedición de la

Ley 1328 de 2009 y el Decreto 2241 de 2010; y tercer momento, a partir de la vigencia de la Ley 1748 de 2014 y el Decreto 2071 de 2015.

En el caso sometido a estudio, el traslado al RAIS del actor fue el 26 de julio del 2000, lo que se corresponde con el primer momento, ciclo para el cual según lo expresado en la sentencia SL-1452-2019, la obligación de la administradora privada demandada era la de brindar una información necesaria y transparente.

Se tiene entonces que PORVENIR S.A, no cumplió con la carga de probar el haber realizado en la etapa previa a la suscripción del formulario de afiliación, una asesoría lo suficientemente clara, detallada y concreta en relación con su situación particular, por tanto, debe concluirse que es desde allí que el traslado resulta ineficaz, generando como consecuencia que la afiliación válida es la efectuada al régimen de prima media, debiéndose en consecuencia **CONFIRMAR** la providencia de primera instancia, en tal sentido.

***i. Efectos de la ineficacia y conceptos a devolver por los fondos privados:***

Ahora bien, con relación a los **VALORES A DEVOLVER POR EL FONDO PRIVADO**, la jurisprudencia ha indicado que debe darse aplicación al artículo 1746 del Código Civil que gobierna las restituciones mutuas en el régimen de nulidades, con la necesaria precisión de que al tratarse de un tema pensional, el juez del trabajo debe aplicar soluciones que compensen de manera satisfactoria el perjuicio que fue ocasionado a un afiliado por el cambio injusto de régimen pensional y ello implica que la AFP que dio lugar a ello traslade a COLPENSIONES: (i) la totalidad del capital ahorrado, (ii) los rendimientos financieros obtenidos y (iii) los gastos de administración y comisiones con cargo a sus propias utilidades, pues desde el nacimiento del acto ineficaz, estos recursos debieron ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por COLPENSIONES.

De igual forma, también debe sumarse que no puede verse afectada la sostenibilidad financiera del régimen de prima media con prestación definida, pues debe garantizarse que COLPENSIONES reciba una suma equivalente a la que hubiese generado con rendimientos financieros, en caso de que el demandante no se hubiese trasladado, y es claro que de acuerdo con la forma

como se distribuyen las cotizaciones en el RAIS, parte de ellas se imputaron a gastos de administración, compañías aseguradoras y el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, sumas que como se dijo no puede ser inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso de que el demandante hubiere permanecido bajo la administración de COLPENSIONES.

Por lo anterior, **PORVENIR S.A.**, además de lo ordenado por el juez, deberá también devolver lo correspondiente a los seguros previsionales, los cuales se componen de la prima de reaseguros de Fogafín y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, que junto con las cuotas de administración, deberán ser indexados, con cargo a sus propios recursos, y además también se deberá devolver, lo destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, conforme lo dispone el artículo 7 del Decreto 3995 de 2008 compilado en el DUR 1833 de 2016, debiéndose en este aspecto **ADICIONAR** la sentencia, para en su lugar **ORDENARLE a PORVENIR S.A.**, incluir en los valores por entregar a COLPENSIONES, estos conceptos.

***i. Excepción de prescripción de la acción.***

En lo que tiene que ver con la excepción de **PRESCRIPCIÓN**, la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL-1688 de 2019, ha señalado que la prosperidad de la ineficacia es el resultado del incumplimiento de un elemento estructural del negocio, por lo que, al no haber producido efectos, el solo transcurso del tiempo no tiene la virtualidad de integrar los elementos omitidos, postura que comparte esta Sala por lo que debe decirse que no está llamada a prosperar.

Con los argumentos anteriores y atendiendo al principio de consonancia de que trata el artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 35 de la Ley 712 de 2001, esta Sala hizo un pronunciamiento implícito de las alegaciones presentadas.

Así las cosas, se **ADICIONARÁ** y **CONFIRMARÁ** la sentencia revisada en apelación y en grado jurisdiccional de consulta.

Las costas procesales de la primera instancia como lo dijo el juez. Las costas de la segunda instancia son a cargo de PORVENIR S.A., por no salir adelante.

el recurso de apelación. Las agencias en derecho de la segunda instancia se tasan en la suma de \$908.526.

Por lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

**RESUELVE:**

**PRIMERO:** Se **CONFIRMA** la sentencia de primera instancia en lo que tiene que ver con la declaración de la ineficacia de la afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por **PORVENIR S.A.**

**SEGUNDO:** Se **ADICIONA** la sentencia, en cuanto a los valores a devolver al fondo público, y en su lugar, se le **ORDENA** a **PORVENIR S.A.**, trasladar a **COLPENSIONES**, además de lo ordenado por el juez, los seguros previsionales, esto es, la prima de reaseguros de Fogafín y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, conceptos que junto a las cuotas de administración serán debidamente indexados, con cargo a sus propios recursos, y lo destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima conforme lo dispone el artículo 7 del Decreto 3995 de 2008 compilado en el DUR 1833 de 2016.

**TERCERO:** En lo demás se **CONFIRMA** la sentencia.

**CUARTO:** Costas procesales y agencias en derecho como se dejó dicho.

Se notifica lo resuelto por **ESTADOS**. De no ser susceptible del recurso extraordinario de casación se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Los Magistrados,



**GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**

  
**CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA**

  
**HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ**

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR  
DE MEDELLÍN - SALA LABORAL - HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por  
estados N° 113 del 30 de junio de 2021

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>